



Consejo de
Transparencia y
Buen Gobierno

PRESIDENCIA

RESOLUCIÓN

N/REF: RT 0333/2017

FECHA: 30 de noviembre de 2017

ASUNTO: Resolución de Reclamación presentada al amparo del artículo 24 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno

En respuesta a la Reclamación número RT/0333/2017 presentada por [REDACTED], el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, considerando los Antecedentes y Fundamentos Jurídicos que se especifican a continuación, adopta la siguiente **RESOLUCIÓN**:

I. ANTECEDENTES

1. Los hechos que han originado la presente Reclamación pueden sistematizarse como sigue.

a) Mediante escrito registrado en la Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno de la Comunidad de Madrid el 25 de mayo de 2017, la ahora reclamante, funcionaria interina de dicha administración autonómica, tras poner de manifiesto que el punto segundo del Acuerdo de 29 de marzo de 2017 entre el Gobierno y los Sindicatos prevé que "no computará a efectos de tasa de reposición la convocatoria de plazas que, en los términos previstos en la Disposición transitoria cuarta del texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público, estén dotadas presupuestariamente y, a la fecha de firma de este acuerdo, y desde una fecha anterior al 1 de enero de 2005, hayan venido estando ocupada ininterrumpidamente de forma interina o temporal. A estas convocatorias les será de aplicación lo previsto en el apartado tercero de la citada Disposición transitoria del Estatuto Básico del Empleado Público" solicita, literalmente, «se me informe, si como resulta de forma clara me encuentro en el

ctbg@consejodetransparencia.es



supuesto previsto en la norma transcrita o, si por el contrario, se ha producido algún cambio por mi desconocido y en cualquier caso en modo alguno notificado y consentido, que haya llevado a que la plaza que ocupo se haya vinculado a ofertas de empleo público posteriores al ejercicio 2005».

b) Mediante Resolución del Director General de Función Pública de la Comunidad de Madrid de 20 de junio de 2017, se resuelve la solicitud de referencia. En concreto, tras poner de manifiesto, en primer lugar, que la solicitud de información se refiere a «si resulta de aplicación al puesto de trabajo [...] el Acuerdo para la mejora del empleo público, firmado el 29 de marzo de 2017, entre el Ministerio de Hacienda y Función Pública y las Organizaciones Sindicales [...] o, en su caso, si dicho puesto se halla vinculado a Oferta de Empleo Público posterior a la del año 2005» señala que «las medidas reflejadas en el Acuerdo de referencia, para su plena efectividad, y tal y como dispone su apartado cuarto, han de ser incorporadas en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017, en los términos que, en su caso, correspondan, otorgándose en el mismo la posibilidad de que, una vez entre en vigor el citado texto legal y conforme a los extremos que determine a tal efecto, las Administraciones Públicas realicen, si lo estiman procedente, los correspondientes procesos de consolidación», concluye concediendo el acceso a la información solicitada, «a cuyos efectos se informa, en los términos requeridos por la interesada, que el puesto de referencia se encuentra vinculado a Oferta de Empleo Público posterior a la anualidad 2005».

c) Disconforme con esta Resolución de 20 de junio de 2017, mediante escrito registrado en esta Institución el 1 de septiembre de 2017 la interesada interpone una reclamación ante este Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. Entre otras consideraciones, considera que «en modo alguno se está accediendo a lo solicitado en los términos requeridos, basta un simple cotejo de lo solicitado y lo que se contesta, siendo claro y evidente que el derecho de información se cumple cuando se da conocimiento o noticia de una cosa o situación, en asunto de la competencia de quien informa, o por quien dispone de los datos fehacientes de lo que se debe informar».

2. El 1 de septiembre de 2017, por la Oficina de Reclamaciones de las Administraciones Territoriales de este Consejo, se dio traslado del expediente de referencia, por una parte, a la Dirección General de Calidad de los Servicios y Atención al Ciudadano de la Comunidad de Madrid para conocimiento y, por otra parte, al Secretario General Técnico de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte de la Comunidad de Madrid a fin de que, en el plazo de quince días hábiles, se formularan las alegaciones que se estimasen convenientes, aportando, asimismo, toda la documentación en la que fundamentar las alegaciones que pudieran realizarse.

Por escrito del Director General de Función Pública de la citada Consejería, registrado en esta Institución el 4 de octubre de 2017, se traslada escrito de alegaciones en el que, en síntesis, se señala lo siguiente:





- Tras reproducir el “*petitum*” que constaba en la solicitud originaria sobre qué normativa resultaría de aplicación a si puesto de funcionaria interina, señala que en la Resolución ahora recurrida “se concede el acceso a la información en los términos requeridos por la interesada -y no otros-[...] reproduciendo prácticamente la literalidad del texto que hacía constar la interesada precisamente para que no diera lugar a equívoco alguno, por lo que, a nuestro entender, y salvo mejor criterio de esa Institución, se considera que se ha satisfecho el objeto sobre el que versaba su solicitud”.
- La recurrente, «en la reclamación que ahora nos ocupa, hace alusión a cierta información adicional que en modo alguno hizo constar en su solicitud de 25 de mayo, excediendo así su pretensión actual del “*petitum*” al que debía ceñirse la resolución dictada por este Centro directivo. Así, en la página quinta de su reclamación [...] muestra su disconformidad con el hecho de que en la Resolución se omita “indicar a qué Oferta de Empleo Público posterior a 2005, destacando que sin indicar a qué Oferta de Empleo Público se encuentra vinculada, sólo de forma indeterminada se dice que a una posterior a 2005 [...]”, cuando recordemos que, en su solicitud de acceso a la información, la interesada preguntaba expresa y literalmente si “la plaza que ocupó se haya vinculado a ofertas de empleo público posteriores al ejercicio 2005”.

II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS

1. De conformidad con lo previsto en el artículo 24 de la LTAIBG, en relación con su artículo 38.2.c) y el artículo 8.2.d) del Real Decreto 919/2014, de 31 de octubre, por el que se aprueba el Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, el Presidente de este organismo es competente para resolver, con carácter potestativo y previo a un eventual recurso contencioso-administrativo, las reclamaciones que se presenten en el marco de un procedimiento de acceso a la información.
2. A tenor del artículo 24.6 de la LTAIBG, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno tiene competencia para conocer de las reclamaciones que regula dicho precepto “*salvo en aquellos supuestos en que las Comunidades Autónomas atribuyan dicha competencia a un órgano específico, de acuerdo con lo establecido en la disposición adicional cuarta de esta Ley*”. Tal disposición prevé en sus apartados 1 y 2 lo siguiente:

“1. La resolución de la reclamación prevista en el artículo 24 corresponderá, en los supuestos de resoluciones dictadas por las Administraciones de las Comunidades Autónomas y su sector público, y



por las Entidades Locales comprendidas en su ámbito territorial, al órgano independiente que determinen las Comunidades Autónomas. (...).

2. Las Comunidades Autónomas podrán atribuir la competencia para la resolución de la reclamación prevista en el artículo 24 al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. A tal efecto, deberán celebrar el correspondiente convenio con la Administración General del Estado, en el que se estipulen las condiciones en que la Comunidad sufragará los gastos derivados de esta asunción de competencias”.

En desarrollo de las anteriores previsiones normativas el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno y la Comunidad de Madrid (Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno) suscribieron el pasado 2 de noviembre de 2016 un *Convenio para el traslado del ejercicio de la competencia para la resolución de las reclamaciones previstas en el citado artículo 24 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno* -BOE, n. 13, de 16 de enero de 2017- en los supuestos de resoluciones dictadas por aquella Administración Autonómica y por las Entidades Locales incluidas en su ámbito territorial, así como por los entes, organismos y entidades integrados en el sector público autonómico o local.

3. Precisadas las reglas sobre competencia orgánica para dictar esta resolución, por lo que respecta al fondo del asunto planteado en la presente Reclamación -la consulta sobre si resulta de aplicación a un determinado puesto de trabajo cubierto por un funcionario interino las previsiones del Acuerdo de 29 de marzo de 2017 entre la Administración y los Sindicatos o si se halla vinculado a Oferta de Empleo Público posterior a la del año 2005- cabe señalar que su análisis debe partir del contraste entre el posible objeto de una solicitud de información suscitada al amparo de la LTAIBG en relación con la concreta solicitud formulada en el caso que ahora nos ocupa.

En este sentido, debemos de partir recordando que el artículo 12 de la LTAIBG reconoce el derecho de todas las personas a acceder a la “información pública” en los términos previstos en el artículo 105.b) de la Constitución y desarrollados por dicha norma legal. Previsión que ha de complementarse con el contenido del artículo 13 de la LTAIBG en el que se define la “información pública” como

“los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones”.

A tenor de los preceptos mencionados cabe poner de manifiesto que el concepto de información pública que recoge la Ley, en función del cual puede presentarse una solicitud de acceso, se refiere a información de la que disponga un organismo o entidad de los sujetos a la Ley en el momento en que se produce la solicitud. Y



ello, para garantizar el objetivo que persigue la norma que no es otro que “ampliar y reforzar la transparencia de la actividad pública, regular y garantizar el derecho de acceso a la información relativa a aquella actividad” -artículo 1 de la LTAIBG-. Es decir, la Ley de transparencia no ampara solicitudes de información dirigidas a obtener información de carácter meramente administrativa o de funcionamiento, conocer la normativa aplicable a un determinado supuesto, ni aclaraciones de normativa aplicable, es decir, solicitudes de información sobre el estado de procedimientos o trámites administrativos que podrían ser perfectamente atendidas a través de servicios como los de de información pública y atención ciudadana mediante sus diferentes medios de comunicación -buzones de información, etc.- o a través de las funciones consultivas atribuidas a órganos de la Administración pública, como es el caso de la gestión de recursos humanos..

Este Consejo de Transparencia entiende, en definitiva, que el ciudadano dispone de vías para obtener la información pretendida en el caso de referencia, entre las cuales no se encuentra la LTAIBG, de modo que siguiendo el criterio fijado en anteriores Resoluciones -entre otras, las números R/0118/2016, de 22 de junio, RT/0112/2016 y RT/0134/2016, de 30 de septiembre-, procede desestimar la reclamación presentada con relación a este aspecto concreto.

III. RESOLUCIÓN

En atención a los Antecedentes y Fundamentos Jurídicos descritos, procede **DESESTIMAR** la Reclamación presentada por [REDACTED], por cuanto su objeto no puede considerarse información pública de acuerdo con lo definido en el artículo 13 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno

De acuerdo con el artículo 23, número 1, de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, la Reclamación prevista en el artículo 24 de la misma tiene la consideración de sustitutiva de los recursos administrativos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

En consecuencia, contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, únicamente cabe, en caso de disconformidad, la interposición de recurso contencioso-administrativo ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo de Madrid en plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su notificación, de conformidad con lo previsto en el artículo



9.1, c), de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

EL PRESIDENTE DEL
CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO
P. V (ARTÍCULO 10 DEL REAL DECRETO 919/2014)

EL SUBDIRECTOR GENERAL DE
TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO

Francisco Javier Amorós Dorda

